

CIENTO VEINTICINCO AÑOS DE LUCHA: EL NACIONALISMO CUBANO Y LA DEMOCRACIA POLÍTICA HACIA EL SIGLO XXI*

Marifeli Pérez-Stable

Cuba se enfrenta a una crisis política. Con la caída del comunismo en Europa del Este y la desintegración de la Unión Soviética, Cuba perdió la red de comercio, créditos y ayuda que la había sostenido frente al embargo de los Estados Unidos. Los dirigentes cubanos han reconocido con reticencia la difícil situación económica de tan dramáticas proporciones que exige de ellos una respuesta contraria a su historia: sin importar la gradualidad con que procedan, deben poner en práctica reformas cuyo corolario lógico es el restablecimiento del capitalismo. Sin embargo, la crisis política no es menos acongojante: para enfrentarla, el gobierno cubano debe avanzar hacia la instauración de una democracia política. Debido en parte a que la dirigencia debe aún reconocer la segunda crisis, las perspectivas de una transición política exitosa son todavía más inciertas que las relacionadas con una transformación económica eficaz. Simplemente, puede decirse que para afrontar con éxito la crisis política en definitiva deben celebrarse elecciones libres y abiertas que bien podrían terminar con el ejercicio del poder de Fidel Castro y el Partido Comunista de Cuba (PCC), opción que el actual gobierno no ha considerado seriamente hasta el momento.

Aunque los orígenes de la crisis política radican en gran medida en el curso de los acontecimientos internos ocurridos con posterioridad a 1959 y, por consiguiente, la democratización debería ser una respuesta a las exigencias de la sociedad cubana, la política de los Estados Unidos desvía cualquier impulso (por mínimo que sea) que

* Para una completa exposición de los argumentos presentados en el presente trabajo, véase por favor Marifeli Pérez-Stable, *The Cuban Revolution: Origins, Course, and Legacy*, (Nueva York: Oxford University Press, 1993) y *Legislative and Electoral Dynamics: Reforms and Options in Transition in Cuba: New Challenges for U. S. Policy*, pp. 39 a 65. Esta última obra, terminada en 1993, es un proyecto del Cuban Research Institute del Latin American and Caribbean Center de la Universidad Internacional de Florida, patrocinado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional.

podieran tener los dirigentes cubanos para abrir el sistema político. En el mundo que ha seguido a la Guerra Fría, Estados Unidos ha condicionado la normalización de relaciones al establecimiento de la democracia política en la Isla. Debido a que el nacionalismo fue la fuerza motriz de la Revolución Cubana y todavía constituye el último baluarte de legitimidad del gobierno, la actual dirigencia se muestra reacia a aplicar reformas que parezcan concesiones a los Estados Unidos. Dado que la política de este país, especialmente la Ley de 1992 denominada *Cuban Democracy Act* (CDA), es una afrenta a la soberanía de Cuba, apoya sin querer la influencia del gobierno cubano en el nacionalismo. En realidad, con la salvedad del gobierno de Carter, Estados Unidos nunca tuvo relaciones normales con Cuba, antes de 1959 o después de esa fecha. Y ese hecho es un elemento básico del dilema de Cuba en los años noventa.

De ahí que el tema de la democracia política se halla atrapado en las agitadas relaciones entre Cuba y los Estados Unidos. Por una parte, los dirigentes cubanos cargan sobre sus hombros un país más soberano cuyos ciudadanos tienen mayor igualdad; consideran que la soberanía nacional y la justicia social constituyen la esencia de la democracia, y las reglas que emanan de ella son una salvaguardia obligatoria. Por otra parte, el gobierno estadounidense define la democracia en función de sus formas políticas: libertades cívicas, separación de poderes, elecciones disputadas. Sin duda, en el mundo de los años noventa, un sistema político que no garantice los derechos de una oposición pacífica y ofrezca la oportunidad de competir por los cargos públicos no puede considerarse razonablemente democrático. Sin embargo, hace 35 años, cuando la Revolución Cubana llegó al poder, la idea de formas alternativas de democracia parecía verosímil. En ese entonces, el gobierno revolucionario rechazó la democracia representativa y abrazó la causa de la búsqueda de una nueva democracia. Sin embargo, después de más de tres decenios, los dirigentes cubanos no han avanzado más hacia la forja de otras formas democráticas: la búsqueda ha terminado dramáticamente. El balance de revolución y socialismo ha desenmascarado inequívocamente el mito de una alternativa a la democracia política, de este modo, debido en gran medida a consideraciones internas, el gobierno cubano debe avanzar en esa dirección. Realmente, la historia juzgará a la postre a la Revolución Cubana y su dirigencia sobre la base de cómo el actual gobierno sale adelante (o fracasa) para dar lugar a una transformación democrática del socialismo y de la política de partido único.

La revolución social de 1959 y el establecimiento de un nuevo sistema político.

La Revolución Cubana fue el acontecimiento más extraordinario en la historia de la Isla. Sus raíces se remontan a la larga lucha por la independencia contra España en el siglo XIX, los vínculos estrechos y a menudo traumáticos con los Estados Unidos en el siglo XX y las peculiaridades de la sociedad cubana: una economía basada en el monocultivo marcada por contrastes discordantes de modernidad y atraso; una estructura e interacciones sociales complejas entre las clases sociales; y un sistema político de instituciones débiles. Cuando el 1 de enero de 1959 Fidel Castro proclamó: "¡Esta vez la revolución va en serio!", el pueblo cubano respondió con un gran aumento de voluntad, energía y entusiasmo. La revolución despertó en el cubano común un nuevo sentido de poderío que le permitió imaginar una nueva Cuba con mayor soberanía e igualdad. Aun cuando en el punto culminante de la Guerra Fría, el nuevo gobierno se volvió hacia la Unión Soviética y abrazó el comunismo, el llamado del nacionalismo y el compromiso con la justicia social demostraron ser más fuertes en la mayoría de los cubanos que el anticomunismo en el que habían creído hasta entonces. ¿Puede haberse dado un testimonio más poderoso a la autenticidad de la revolución que la facilidad relativa con que la abrumadora mayoría del pueblo cubano relegó a segundo plano los sentimientos predominantes de ese entonces y apoyó la nueva Cuba?

De esta manera, la mayor ventaja de la Revolución Cubana fue el notable grado de consenso popular que concitó. Que el pueblo cubano la haya respaldado tan intensamente fue, además, la mejor defensa de Cuba contra los Estados Unidos. Después de 1961, cuando el gobierno revolucionario frustró la invasión de Bahía de Cochinos, su principal tarea política consistió en traducir la efervescencia de la revolución social en una infraestructura institucional, prácticas políticas y normas culturales que consolidaron la nueva Cuba. Indispensable para esa efervescencia fue, por una parte, la interacción entre el apoyo popular y el liderazgo de Fidel Castro y, por otra, la identificación de su autoridad con la revolución y la "patria". La consigna "con Cuba o contra Cuba" que tanto exigió el pueblo cubano se hizo equivalente a "con Fidel o contra Fidel". De este modo, la nueva política surgió en un ambiente de unidad nacional que convertía en traición cualquier manifestación de disidencia. Que el gobierno

revolucionario no dejara más opción que la cárcel, la muerte o el exilio a sus oponentes no auguró ciertamente nada bueno para la democracia política. Sin embargo, ese mismo gobierno y su programa de soberanía nacional y justicia social disfrutaron de un grado impresionante de apoyo popular. Y, ciertamente, el desafío consistía en institucionalizar un sistema político que lo consolidara y renovara permanentemente.

Desde comienzos de los años sesenta, el gobierno cubano ofreció cuatro respuestas a esa tarea: una institucionalización mesurada (1961-1965); el experimento radical de la movilización de masas y estrategias económicas no ortodoxas (1966-1970); una institucionalización más completa (1971-1985), y el proceso de rectificación (1986 hasta la fecha). Aunque estas respuestas y sus contextos interno e internacional diferían de manera importante, el punto central fueron las instituciones del socialismo de Estado: una economía de planificación centralizada y un sistema político de vanguardia dirigido por el partido que, hasta en los años ochenta, parecían ser alternativas viables al capitalismo y la democracia representativa. Al mismo tiempo, la política cubana giró también en torno a la identificación del concepto Fidel-"patria"-revolución como el imán que reunía el apoyo popular y la unidad de las minorías selectas. En el lapso de 35 años, estos dos modelos (socialismo de Estado y Fidel-"patria"-revolución) han configurado en forma tensa el sistema político: el primero ha hecho hincapié en el papel que juegan instituciones tales como el PCC y la Junta Central de Planificación y, el segundo, ha subrayado el rol de Fidel Castro y las movilizaciones populares. Cinco premisas decisivas han servido de base a los esfuerzos de la dirigencia cubana por establecer un nuevo sistema político.

La primera y la más importante es el nacionalismo intrínseco en las luchas por una Cuba soberana iniciadas en el siglo XIX y concluidas con la revolución. La independencia respecto de los Estados Unidos es la brújula: mantenerla ha sido la razón de ser del gobierno cubano y la primordial consideración de muchos cubanos para seguir apoyándola. En segundo lugar —y estrechamente unida a la soberanía nacional— está la justicia social. El socialismo hizo posible la igualdad relativa para satisfacer las necesidades básicas. Debido a que los cubanos gozan de mayor igualdad, están unidos y la unidad nacional es la condición *sine qua non* para enfrentarse resueltamente a los Estados Unidos. De este modo, una característica medular de la política cubana después de 1959 ha sido una vigorosa adhesión a las

políticas que mejoran la justicia social y reducen al mínimo las divisiones entre los cubanos. Estas dos premisas –la soberanía nacional y la justicia social– constituyen el punto crucial de la "revolución permanente" que el gobierno cubano reclama como su manto.

Los otros tres principios rectores derivan lógicamente de los dos primeros: el concepto de las "masas"; la creación de una nueva "conciencia" y el mantenimiento de la unidad de las élites. La dirigencia cubana consolidó su autoridad sobre la base de las movilizaciones extraordinarias. El abrumador apoyo popular justificó la idea de crear formas alternativas de hacer política. En consecuencia, el objetivo central de la política cubana ha sido la institucionalización de ese apoyo y, por ello, la creación de una nueva "conciencia" popular ha sido clave. Ciertamente, el cubano común manifestó un grado notable de "conciencia" al resistir a los invasores en Bahía de Cochinos, al participar en la campaña de alfabetización y al cerrar filas en torno al gobierno durante la crisis de los misiles. Sin embargo, esta "conciencia" sólo florecería si en su vida cotidiana siguieran valorando "bienes" colectivos, como la soberanía nacional y la justicia social, por encima de la búsqueda individual de intereses materiales. El esfuerzo por afianzar una valoración de estos "bienes" colectivos explica en parte la vieja resistencia de la dirigencia a las reformas concebidas en función del mercado que subrayan el beneficio individual. Por último, los dirigentes cubanos han considerado asimismo la unidad de las élites como un elemento integral de la nueva política. Si se dividieran ¿a quién seguiría el pueblo? Y si las "masas" obedecieran a distintos líderes, ¿cómo podría la "patria" resistir a los Estados Unidos?

Estos cinco principios –nacionalismo, justicia social, las "masas", una nueva "conciencia" y la unidad de las élites– surgieron durante la revolución social. Eran claramente incompatibles con la democracia representativa y su fastidiosa insistencia en el sistema de pesos y contrapesos, separación de poderes y derechos individuales. Sin embargo, estos principios parecieron constituir –en 1959 y durante gran parte de los pasados 35 años– el núcleo de una forma alternativa de hacer política, impulsada inflexiblemente por los ideales de patria y justicia social. Que ese propósito único dejara escaso margen para la expresión de la diversidad parecía algo intrascendente ante el formidable consenso que imponía la Revolución Cubana. Que, además, la adhesión a la "patria" y la revolución rápidamente se hiciera indivisible de la lealtad a Fidel Castro no pareció inquietar a la mayoría de los cubanos. Después de todo, Fidel era un revolucionario

de dimensiones épicas y su liderazgo había sido incuestionablemente vital para la creación de la nueva Cuba. Durante mucho tiempo, sus cualidades excepcionales parecieron pesar más que la otra innegable realidad evidente desde el comienzo: que Fidel era también Castro, un caudillo y un autócrata.

Después de 35 años, los dirigentes cubanos se hallan en un callejón sin salida porque en realidad nunca avanzaron más allá de la política de la revolución. Las cuatro respuestas que dieron al reto de establecer un sistema político capaz de consolidar y renovar el apoyo extraordinario que habían obtenido en un principio erraron el blanco. Por una parte, las experiencias de la Unión Soviética y de los países de Europa del Este desacreditaron definitivamente el socialismo de Estado. Por otra, el modelo Fidel-"patria"-revolución ya no posee la legitimidad que alguna vez gozó. Además, aunque las cinco premisas que servían de base a la interacción, a menudo tensa, entre estos dos modelos se han agotado o casi no existen, los dirigentes cubanos siguen insistiendo en ellas, en ello radica el *quid* de la crisis política.

Escollos políticos de la Revolución Cubana.

En primer lugar, la Revolución Cubana ya es historia; aunque la "idea" de la revolución esté muy viva, la revolución propiamente dicha terminó hace ya mucho tiempo. Las revoluciones sociales no son eternas: después de un período relativamente breve de transformaciones radicales, comienza un proceso de institucionalización que trata de garantizar la estabilidad del nuevo orden. En ese sentido, la Revolución Cubana llegó a su fin en 1970, cuando la incapacidad de producir una zafra de 10 millones de toneladas de azúcar obligó a la dirigencia cubana a desistir del experimento radical y a aceptar más plenamente los modelos tradicionales del socialismo de Estado. En los decenios de 1970 y 1980, la realidad del socialismo predominó cada vez más por sobre la efervescencia de la revolución. De este modo, la revolución (hasta 1970) y el socialismo (después de 1970) concedieron a la sociedad cubana una dinámica característica, aunque también parcialmente coincidente: la primera, surgió de la desaparición de la vieja Cuba y forjó un consenso popular para apoyar un programa de soberanía nacional y justicia social; la segunda, se

convirtió en la vía para realizar ese programa y consolidar la nueva Cuba.

Sin embargo, a pesar de que la dinámica del socialismo de Estado ha definido cada vez más a la sociedad cubana, la idea de la revolución ha mantenido su pertinencia como consecuencia de tres factores importantes. En primer lugar, los actuales dirigentes cubanos son básicamente los revolucionarios de 1959. El recuerdo del apoyo popular otrora excepcional y la creencia de que su dominio es indispensable para salvaguardar a la "patria" los hace inflexibles en el ejercicio del poder. En segundo lugar, un porcentaje importante de la población posee fuertes vínculos emocionales con la revolución social debido a toda una vida de convicción y dedicación. Si reconocieran el fin de la revolución, tendrían que buscar una brújula distinta para orientar sus vidas. En tercer lugar, aun cuando la Guerra Fría haya terminado, la política estadounidense no ha variado, lo que refuerza la opinión de que Estados Unidos constituye el adversario implacable de Cuba. En síntesis, la presencia de Fidel Castro, cierto grado de apoyo popular y la política estadounidense, han prolongado la vida de la dinámica Fidel-"patria"-revolución. Ese modelo, sin embargo, es la raíz de la crisis política y la constante confianza del gobierno cubano en él es un signo inequívoco de debilidad.

Aunque la unidad férrea alrededor de Fidel Castro, la "patria" y la revolución permitió inicialmente al gobierno cubano sobrevivir frente a los Estados Unidos, su política impuso una reglamentación de la vida pública que en la actualidad socava el legado revolucionario. Durante los preparativos del congreso del PCC en 1991, los dirigentes cubanos reconocieron que muy a menudo la "doble moral" determinaba las fronteras del discurso público: la gente tenía temor de hablar claramente porque el sistema político sólo permitía la expresión de unanimidad en respaldo de la dirigencia por el bien de la "patria". De hecho, la política de Fidel-"patria"-revolución creó un segundo tipo de sociedad fuera de los confines de la Cuba oficial, cuya realidad ha sido recogida mordazmente en una observación popular: en realidad, existen 22 millones de cubanos – 11 millones que caminan por las calles y 11 que vuelven a sus hogares todas las noches. Además, como sucedió en otras partes, la política de partido único en Cuba no era propicia para el pluralismo político. Por ello, ninguno de los dos modelos fue de gran ayuda para el segundo tipo de sociedad. Aunque a comienzos de los años noventa el gobierno cubano reconoció indirectamente un elemento importante de la

crisis política, siguió tan intransigentemente aferrado como antes a los dogmas que originaron la doble moral. A menos que las élites cubanas hallen el valor y la cordura para la apertura de un nuevo camino político que permita al segundo tipo de sociedad expresarse libremente, la historia no las juzgará con indulgencia.

La economía fue un segundo escollo de la política cubana después de 1959. Sin duda, el socialismo hizo más justa a la sociedad cubana. En realidad, los cubanos pueden satisfacer de manera mejor y más equitativa las necesidades básicas de salud, educación y seguridad social que la mayoría del resto de los latinoamericanos. Si bien los éxitos sociales del gobierno cubano son reconocidos en general, su historial económico ha sido variado, en el mejor de los casos. En los últimos 35 años, el crecimiento sistemático le ha sido esquivo a la economía cubana: sólo durante los años setenta ésta acusó un crecimiento real por habitante. Aunque el gobierno hizo modestos esfuerzos por diversificar la economía interna, sólo redujo levemente la dependencia de las exportaciones de azúcar, lo que explica en parte los déficit comerciales crónicos y la constante vulnerabilidad ante la economía mundial. Además, el desarrollo de Cuba después de 1959 dependió de la red de comercio, créditos y ayuda que le brindaban la Unión Soviética y los países de Europa del Este; sin ese respaldo se ha producido prácticamente el colapso de la economía cubana. De este modo, los dirigentes no pudieron crear una sólida base económica que sirviera de sustento al país. Además, al igual que el socialismo de Estado existente en otras partes, mucho antes de su desaparición el socialismo cubano había puesto de manifiesto hacía ya mucho tiempo las debilidades de la planificación centralizada. En los años noventa, la realidad económica era inevitable: la segunda economía más antigua (el mercado negro) ha sido tan próspera que el valor de sus bienes y servicios duplica el del comercio oficial al detalle. Los sectores capitalistas son actualmente los únicos bolsones de eficiencia y productividad en la economía cubana. A fin de cuentas, entonces, el socialismo cubano no pudo consolidar una economía capaz de sostener permanentemente los ideales revolucionarios de soberanía nacional y justicia social.

Un tercer escollo político es el concepto de las "masas". Si la revolución social dio realmente vida al concepto, los logros de los pasados 35 años lo han tornado decididamente obsoleto. En los noventa, los cubanos son más urbanos, gozan de mayor salud y poseen mejor educación que en 1959. En la sociedad cubana está presente

una masa crítica de profesionales y trabajadores especializados. Los cubanos contemporáneos son, por lo tanto, "ciudadanos" y no "masas", ni tampoco la política de partido único o la dinámica de Fidel-"patria"-revolución puede adaptarse adecuadamente a la individualidad y diversidad del concepto de ciudadanía. Además, estas nuevas generaciones de cubanos no han desarrollado la "conciencia" que los dirigentes cubanos tanto necesitaban como centro de la nueva política. Aunque el cubano común ha sido a menudo capaz de actos extraordinarios de heroísmo, valentía y dedicación, en general no ha incorporado esa "conciencia" en su vida cotidiana. En síntesis, las preocupaciones de la vida diaria han cobrado mayor importancia en la "conciencia" real de los ciudadanos que las visiones históricas de la dirigencia cubana. El hecho de la "conciencia" abnegada y heroica manifestada en épocas de crisis se haya vuelto una quimera en la vida y el trabajo cotidianos, ha resultado ser el cuarto escollo político.

Los dirigentes cubanos han demostrado ser muy aficionados a reconfigurar la coalición de las élites gobernantes. Desde el inicio, han hecho gala de una capacidad impresionante para rotar estas élites, mantener el consenso entre ellas e impedir divisiones importantes en los grupos dirigentes. En los años noventa, la dirigencia cubana ha dado una vez más prueba de su talento. En el congreso del PCC de 1991, la composición del nuevo Comité Central reveló una notable renovación (más de dos tercios) y una representación social y geográfica más amplia de la población cubana que la de los anteriores comités centrales. Análogamente, el perfil de los diputados elegidos para la Asamblea Nacional en 1993 revela una renovación mayor (más de 85%) y una representatividad más amplia que la de la Asamblea anterior. Sin embargo, los dirigentes cubanos aún deben enfrentar la prueba decisiva de la renovación de las élites. No han considerado seriamente la imperiosa necesidad de que haya de una competencia significativa para los cargos públicos y, por lo tanto, la posibilidad de entregar las riendas del gobierno a otra coalición de élites. Una vez más, ni la política de partido único ni la dinámica de Fidel-"patria"-revolución permiten una verdadera renovación de las élites, como tampoco que existan alternativas de la oposición. Y ese es el último escollo de la política cubana posterior a 1959.

Cuba afronta, sin duda, una crisis política. En los años noventa, el sistema político está en pugna con la sociedad cubana. Además, es incapaz de garantizar en el siglo XXI los logros de patria y justicia social derivados de la revolución. Las instituciones cubanas parecen

incapaces de incorporar las energías creativas —políticas y económicas— de las nuevas generaciones de ciudadanos, cuyo aporte la "patria" necesita desesperadamente. Sin embargo, Cuba se halla también en un estancamiento político. Aunque las dimensiones de la crisis son atemorizantes, es probable que el gobierno cubano permanezca en el poder en el futuro previsible. ¿Por qué?

El *impasse* político de Cuba.

El obstáculo principal para enfrentar la crisis política consiste en que ésta todavía no ha alcanzado su punto culminante: los cubanos no han puesto abiertamente en jaque al gobierno. Sin embargo, su aquiescencia es engañosa. No indica ciertamente apoyo mayoritario ni siquiera la disposición del público a escuchar a la dirigencia y concederle el beneficio de la duda. Por el contrario, el gobierno cubano, durante la mayor parte del ejercicio del poder, obtuvo una combinación de apoyo y suficiente buena voluntad para que su dominio fuera, cuando no democrático, al menos políticamente viable. Por supuesto, los dirigentes cubanos sostienen que su autoridad sigue siendo legítima y constituye la única alternativa para salvaguardar la "patria" y la justicia social de conformidad con el legado de 125 años de lucha. No obstante, también han dado muestras de tener un sentido de seguridad más precario de lo que podría indicar su desafiante retórica. En 1991, el congreso del PCC aprobó una resolución por la que facultaba al Comité Central a adoptar cualquier medida necesaria para respaldar al gobierno. En 1992, la versión revisada de la Constitución incluyó dos nuevos artículos: uno que establecía un Consejo de Defensa Nacional y el derecho de declarar estado de emergencia; el otro sancionaba el recurso del pueblo a la lucha armada para defender al gobierno si otros recursos fallaban. Más recientemente, los dirigentes civiles y militares han hecho alusión al posible empleo de la violencia para sofocar la disidencia. Efectivamente, el inmovilismo no significa exactamente apoyo mayoritario al gobierno y al parecer la dirigencia lo sabe.

Sin embargo, la estabilidad actual es real aun cuando depende de un equilibrio precario: la permanencia de Fidel Castro en el poder; una "masa" crítica de apoyo real; el temor, la apatía y el sentimiento de impotencia entre amplios sectores de la población; y la exhortación al nacionalismo, justificado por la política de los Estados Unidos.

El liderazgo de Fidel Castro, aunque se halla muy disminuido, es todavía el imán que cohesiona la unidad de las élites y cualquier apoyo que el gobierno todavía posee. El hecho de que una cantidad suficiente de ciudadanos –si bien no la mayoría– siga apoyando al gobierno hasta el punto de que muchos expondrían sus vidas para defenderlo, constituye indudablemente un poderoso elemento del estancamiento político. Análogamente, que muchos cubanos –muy probablemente la mayoría– estén paralizados en su descontento constituye el reconocimiento de una realidad compleja: la eficacia de la represión; las exigencias de la vida cotidiana dejan pocas energías para dedicarse a otros asuntos; aún no se vislumbra una alternativa viable y verosímil. Así, su silencio es también un elemento crítico del *statu quo*. Finalmente, la política estadounidense, especialmente la ley denominada *Cuban Democracy Act*, alimenta el nacionalismo y le brinda al gobierno cubano un pretexto plausible para oponerse a reformas significativas.

Hemos vuelto al punto de partida. La crisis política se originó decididamente en el agotamiento de la dinámica Fidel-"patria"-revolución y el fracaso de la política de partido único como modelos viables para renovar el apoyo popular y regenerar las élites. Sin embargo, los dirigentes cubanos siguen insistiendo en ambas cosas porque es el único medio que conciben para gobernar. La alternativa consiste en avanzar hacia la democracia política y aceptar el posible resultado de perder el control del poder. Aunque el gobierno estadounidense condiciona el cambio de su política a la puesta en marcha de reformas políticas, la razón principal para instaurarlas es la propia sociedad cubana. En términos generales, Estados Unidos no provocó la crisis política, ésta fue, en su mayor parte, el resultado de acontecimientos internos. Claramente, ambas dimensiones están estrechamente entrelazadas: un cambio en la política estadounidense aliviaría la mentalidad de acoso que sostiene en parte la dinámica de Fidel-"patria"-revolución; los cambios en la política interna de Cuba quizá estimulen al gobierno de Clinton a hacer que el gobierno cubano entable verdaderas negociaciones. Lamentablemente, la política de los Estados Unidos parece inmutable por el momento, de modo que los dirigentes cubanos deben preguntarse cuánto tiempo estarán dispuestos a esperar antes de reconocer la crisis política y comenzar a abordarla de manera responsable.

Oficialmente, el gobierno cubano atribuye la crisis al colapso económico y espera que incluso la superación de su punto más bajo

le permita ganar tiempo. Ya sea que la economía haya alcanzado su nivel más bajo y, más importante todavía, que pueda repuntar —aunque sea modestamente— es un asunto muy discutible. Aun cuando logre ambas cosas, la crisis política no disminuiría de manera significativa. Los dirigentes cubanos no pueden gobernar eternamente en función de la dinámica Fidel-"patria"-revolución y el partido único. En primer lugar, Fidel Castro —de una manera u otra— va a desaparecer del escenario y entonces, el recurso Fidel-"patria"-revolución se habrá agotado definitivamente. En segundo lugar, el Partido Comunista de Cuba no podrá defender su derecho exclusivo a ejercer indefinidamente el poder sin oposición. Por último, y lo más importante, el pueblo cubano ya no está dispuesto a dejarse gobernar de la misma manera que en el pasado. La mayoría ya no reacciona a las premisas que inspiraron la política posterior a 1959. Actualmente, el sistema político es incapaz de renovar el apoyo popular o incluso la disposición de la mayoría de escuchar a la dirigencia para obtener orientaciones verosímiles que permitan salir de la difícil situación por la que atraviesa el país. Sin embargo, la lógica de la política cubana impide asimismo el surgimiento de otra coalición de élites y la formulación de plataformas alternativas que los ciudadanos pudieran considerar para decidir su futuro.

De este modo, incluso en la eventualidad improbable de que la economía se recuperara pronto, los dirigentes cubanos se enfrentarían todavía a un callejón político sin salida. ¿Les queda tiempo de postergar hasta ese momento incierto de recuperación económica la adopción de duras pero finalmente inexorables decisiones políticas? Su inactividad indica hasta el momento que han respondido afirmativamente a esta pregunta. El problema crucial consiste en saber cuánto tiempo les queda para que el curso de los acontecimientos les demuestre si tienen razón o están equivocados. ¿Cuándo y cómo cruzarán el umbral de la transformación política? ¿Los obligará a hacerlo una revuelta popular? ¿Desviarán entonces la voluntad popular con la fuerza de los tanques? En esas circunstancias, ¿seguirían insistiendo con tanta intransigencia en el ejercicio del poder hasta que importantes sectores de la opinión pública cubana e internacional pidan alguna forma de intervención externa? ¿O podrán los dirigentes cubanos todavía liderar el valor y la perspicacia que a menudo los caracterizó en el pasado para romper pacíficamente la opresión del estancamiento actual?

Si los acontecimientos en Cuba se desarrollan de manera precipitada y violenta, el carácter democrático de la transformación se pondría muy en duda. Lamentablemente, cuanto más tiempo transcurra sin que se produzcan cambios sustanciales en la política interna de Cuba o de los Estados Unidos, tanto mayor será la probabilidad de que ocurra un estallido violento. Las mejores perspectivas para una transición política exitosa radican precisamente en alejarse gradualmente de la dinámica Fidel-"patria"-revolución. Para comenzar, los dirigentes cubanos deben reconocer la dimensión política de la angustiosa crisis a que se enfrentan. En seguida se verían obligados a hacer concesiones a la segunda sociedad de manera muy parecida a la que emplearon para buscar avenencias modestas y reticentes con la segunda economía. Así como el gobierno legalizó recientemente (dentro de límites estrictos) la conducta de los ciudadanos que se dedican a la empresa privada, necesita reconocer los derechos políticos de la segunda sociedad. El *quid* del asunto es que el reconocimiento de la segunda sociedad lleva implícita la posibilidad —quizá la certeza— de una reorganización del gobierno. De hecho, esa es la única prueba razonable para efectuar reformas significativas: el establecimiento de reglas del juego político que concedan a los opositores la oportunidad de competir —justa y libremente— para tratar de obtener cargos públicos.

El gobierno cubano y sus partidarios deben reconocer que oponerse a ello no equivale a traicionar a la "patria". Además, contaron con una oposición confiable que es una necesidad absoluta para la transformación pacífica del *statu quo*. Dar a esos ciudadanos que ahora forman una oposición incipiente (y los activistas de los derechos humanos son sólo la punta visible del *iceberg*) la libertad de organizarse y presentar sus programas al público, constituye entonces una condición indispensable si esa transformación ha de producirse. En consecuencia, el Partido Comunista de Cuba debe renunciar a la pretensión de que posee un monopolio del poder dado por la historia. Tarde o temprano, las élites tendrán que enfrentar la desaparición de Fidel Castro. Sin él, tendrán que modificar el sistema político para permitir el debate político. Para entonces, sin embargo, a menos que previamente se hayan instituido las reformas, quizá sea demasiado tarde y el resultado será la desaprobación total del legado revolucionario. Por lo tanto, deberían iniciar los cambios ahora que Fidel Castro ejerce el mando, incluso si a la postre fueran destituidos de sus cargos. Si el gobierno cubano avanzara en esa dirección, obligaría

indudablemente a una modificación de la política estadounidense. Sin embargo, la democratización, lejos de ser una concesión a los Estados Unidos, es la única respuesta legítima a la crisis política provocada por el fracaso de la política de partido único y el agotamiento de la dinámica Fidel-"patria"-revolución.

Conclusión.

En su lucha contra Batista y durante gran parte de su mantenimiento en el poder, los dirigentes cubanos casi siempre hicieron hincapié en la supremacía de los factores políticos para abordar lo que a menudo parecían ser realidades ingobernables. Es por lo tanto más bien irónico que insistan con tanta obstinación en la primacía de la economía para diagnosticar la crisis actual. No importa, pues la crisis también es política y sólo una respuesta política estimulará una transformación pacífica de la situación actual. Cualquiera sea la retórica que empleen, los dirigentes cubanos saben que, tarde o temprano, se producirá una transición de su autoridad. Lo que necesitan decidir en última instancia es si mantendrán indefinidamente el rumbo actual y se expondrán al riesgo de disparar contra sus propios ciudadanos, o si tienen los medios para iniciar una reforma política y aceptar sus consecuencias. A la postre, la historia los condenará o los absolverá respecto de la manera como enfrentaron los desafíos políticos de la crisis actual.